

APORTACIONES A LOS ANTEPROYECTOS LEY DE UNIVERSIDADES PRIVADAS

En relación con la posibilidad de que el personal del Cuerpo de Inspectores de Educación al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, pueda realizar labores de supervisión en Universidades privadas, en cumplimiento del artículo 27.8 de la Constitución Española ("Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes"), se hacen las siguientes consideraciones:

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece en sus artículos 145 y 146, lo siguiente:

Artículo 145. Inspección del sistema educativo

«1. La Administración educativa ejerce la inspección sobre todos los centros docentes públicos, concertados y privados, servicios educativos, programas y actividades del sistema educativo de Andalucía, a excepción del universitario, mediante los funcionarios públicos del cuerpo de inspectores de educación, así como los pertenecientes al extinguido cuerpo de inspectores al servicio de la Administración educativa, creado por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, que no hubieran optado en su momento por su incorporación al de inspectores de educación.

2. Las funciones de la inspección educativa y las atribuciones de los inspectores e inspectoras de educación son las recogidas, respectivamente, en los artículos 151 y 153 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Asimismo, los inspectores e inspectoras de educación tendrán atribuciones para requerir a los directores, directoras y titulares de los centros docentes, así como a los responsables de los distintos servicios y programas, para que adapten sus actuaciones a la normativa vigente, y para mediar en los conflictos que pudieran producirse entre los distintos miembros de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine».

Artículo 146. Organización de la inspección educativa

«1. Los funcionarios que ejercen la inspección educativa actuarán, en el ejercicio de sus funciones, de manera indistinta en las diferentes enseñanzas y niveles que conforman el sistema educativo, a excepción del universitario.

2. Para el desarrollo de las tareas que se le asignen los inspectores e inspectoras de educación intervendrán en los centros, servicios y recursos que se determinen».

Por otro lado, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Universidades, dispone en su artículo 18:

Artículo 18. Inspección, restablecimiento de la legalidad, infracciones y sanciones





«1. La Consejería competente en materia de Universidades realizará las actividades de inspección para vigilar los comportamientos que puedan dar lugar a la revocación de los actos de aprobación, reconocimiento, adscripción o autorización o a la imposición de sanciones o al ejercicio de otras potestades de restablecimiento de la legalidad. En especial, vigilará:

a) Que se cumplen los requisitos, condiciones y compromisos establecidos al crear o reconocer Universidades o al aprobar la creación de centros o su adscripción, o para la impartición de enseñanzas, en especial de las que lo sean con arreglo a sistemas educativos extranjeros.

b) Que sólo se utilice la denominación de «Universidad», o las propias de los centros, enseñanzas, títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional o títulos universitarios no oficiales, cuando se cumplan los requisitos para ello, y que no se utilicen tampoco denominaciones que puedan inducir a confusión con los anteriores.

c) Que sólo impartan enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de grado las facultades y escuelas de las Universidades públicas o privadas, o los centros equivalentes públicos o privados adscritos a una de ellas, que cuenten con los actos administrativos necesarios y cumplan los requisitos legal o reglamentariamente exigidos.

d) Que las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de máster o de doctorado sólo las impartan las mismas facultades, escuelas, institutos universitarios de investigación u otros centros propios de las Universidades o adscritos a ellas que cuenten con los actos administrativos necesarios y cumplan los requisitos legal o reglamentariamente exigidos.

e) Que sólo los centros a que se refieren los apartados anteriores impartan enseñanzas para la obtención de otros títulos a los que se dé la calificación de universitarios.

f) Que se respeten las reglas sobre publicidad de Universidades, centros, títulos y enseñanzas a que se refiere esta Ley, así como los deberes de información que se impongan de conformidad con el artículo 17.3.

2. El personal funcionario que se habilite por el titular de la Consejería para realizar las funciones de inspección tendrán a estos efectos la condición de autoridad y sus actas tendrán valor probatorio.

(...».

De la lectura de los preceptos transcritos, con el marco normativo actual, no parece que se pueda asignar al personal del Cuerpo de Inspección Educativa actividades de inspección en las Universidades tanto públicas como privadas andaluzas.

Analizando derecho comparado de otras CCAA se aprecia, por ejemplo, que la Comunidad Autónoma de Castilla y León aprobó la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León, en cuyo artículo 50 y 51 se establece:

Artículo 50. Competencia.

1. Sin perjuicio de la competencia de la alta inspección del Estado, corresponde a la consejería competente en materia de universidades, ejercer la inspección de las universidades y centros universitarios que desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.



2 . La consejería competente en materia de universidades ejercerá también la inspección de aquellas instituciones , empresas o centros no autorizados a impartir enseñanza universitaria y cuya actividad pueda ser constitutiva de alguna de las infracciones previstas en esta ley .

Artículo 51. Ejercicio de las funciones de la inspección en materia universitaria.

Las funciones de inspección serán ejercidas por funcionarios de carrera pertenecientes al subgrupo A1 dependientes de la consejería competente en materia de universidades, habilitados para el ejercicio de las funciones de inspección por su titular , y por funcionarios de carrera del cuerpo de inspectores de educación. Tendrán a estos efectos la condición de autoridad pública, gozando de la protección reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico.

Vemos como en esta Comunidad Autónoma, a través de norma con rango de ley, sí existe una atribución expresa al Cuerpo de Inspectores de Educación, de funciones de inspección en Universidades.

Por tanto, para que el Cuerpo de Inspectores de Educación al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, pudiera realizar labores de supervisión en Universidades privadas, sería necesario un cambio normativo, concretamente, el citado artículo 18 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Universidades, cuyo texto modificativo podría tener una redacción parecida al contemplado en el transcrito artículo 51 de la la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León.

En cuanto al procedimiento para llevar a cabo tal modificación sería conveniente recabar asesoramiento del Jefe del Servicio de Legislación e Informes de la Secretaría General Técnica de esta Consejería.